



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 207/2019
ACTOR: PODER EJECUTIVO FEDERAL
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

En la Ciudad de México, a cuatro de junio de dos mil diecinueve, se da cuenta a la Ministra instructora Norma Lucía Piña Hernández, con el expediente de la controversia constitucional al rubro citada, promovida por Julio Scherer Ibarra, quien se ostenta como Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal, turnada conforme al auto de radicación correspondiente. Conste.

Ciudad de México, a cuatro de junio de dos mil diecinueve.

Visto el escrito y anexos de Julio Scherer Ibarra, quien se ostenta como Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la que impugna lo siguiente:

"La sentencia dictada en el amparo en revisión con número de expediente 311/2018, del índice del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de fecha 4 de abril de 2018, notificada a esta Consejería Jurídica el día 12 siguiente, así como sus efectos y consecuencias, consistentes en la invasión de esferas competenciales con motivo del desconocimiento de la facultad y competencia constitucional del Titular del Ejecutivo Federal de designar a los Magistrados que integrarán la Tercera Sección y las cinco salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa."

Al respecto, se tiene por presentado al Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal con la personalidad que ostenta¹, designando delegados y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 11, párrafos primero y segundo², de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución

¹ De conformidad con la documental que exhibe al efecto y en términos de los artículos 4 y 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

Artículo 4. La función de Consejero Jurídico, prevista en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estará a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Al frente de la Consejería Jurídica habrá un Consejero que dependerá directamente del Presidente de la República, y será nombrado y removido libremente por éste.

Artículo 43. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes:

(...)

X. Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios y procedimientos en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. En el caso de los juicios y procedimientos, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal podrá determinar la dependencia en la que recaerá la representación para la defensa de la Federación. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas; (...)

² **Artículo 11.** El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 207/2019

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 305³ del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 14 de la citada ley.

De la lectura integral de la demanda y anexos se advierte que el Poder Ejecutivo Federal promueve controversia constitucional en contra de la sentencia dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión 311/2018, esto es, impugna una resolución dictada por un órgano jurisdiccional federal y, al respecto existe criterio jurisprudencial de este Alto Tribunal en el sentido de que, por regla general, la controversia constitucional prevista en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no procede en contra de esa clase de actos, en virtud de que se le daría el carácter de un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa⁵.

Asimismo, el Pleno de esta Suprema Corte estableció como excepción a esa regla general que sólo se puede impugnar en controversia constitucional una sentencia emitida por un tribunal cuando la cuestión a examinar atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado; es decir, que el órgano jurisdiccional demandado carezca de competencia para emitir la resolución que se pretende controvertir y, por lo tanto, no se trate de una

En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurren a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. [...]

³ **Artículo 305.** Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial.

⁴ **Artículo 1.** La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

⁵ Tesis P.J.J. 117/2000, de contenido siguiente: "**CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES.** Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P.J.J. 98/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, página 703, de rubro: 'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL', estableció que si el control constitucional busca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos, en las relaciones de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, debe analizarse todo tipo de violaciones a la Constitución Federal, sin importar sus características formales o su relación mediata o inmediata con la Norma Fundamental. Sin embargo, dicha amplitud para ejercitar la acción de controversia constitucional, no puede llegar al extremo de considerarla como la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo, incluso cuando se aleguen cuestiones constitucionales, porque dichos tribunales al dirimir conflictos que han sido sometidos a su conocimiento, ejercen facultades de control jurisdiccional, razón por la cual por este medio no puede plantearse la invalidez de una resolución dictada en un juicio, pues ello lo haría un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural, además de que en éste no se dirimen conflictos entre los órganos, poderes o entes a que se refieren los artículos 105, fracción I, de la Constitución Federal y 10 de la ley reglamentaria de la materia, sino que tiene como objeto salvaguardar los intereses de los gobernados".
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, octubre de 2000, página 1088.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 207/2019

sentencia que haya resuelto el fondo del asunto, cuyo contenido se pretenda impugnar utilizando este medio de control constitucional como ulterior recurso⁶.

En efecto, del análisis de la ejecutoria dictada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que originó la emisión del anterior criterio, se advierte que el supuesto del que derivó, es el relativo a que un órgano del Estado conoce de un juicio del que el actor estima no debía conocer, porque, de hacerlo, se afectaría directamente su competencia, con independencia del sentido del fallo que dé solución al juicio natural, supuesto que no se actualiza en el presente caso, dado que no se controvierte la competencia del Tribunal Colegiado para resolver el amparo en revisión sometido a su conocimiento, sino la resolución por su propio contenido, en razón de sus efectos y alcances, como se desprende de la propia demanda:

"Ahora bien, es importante resaltar que no se cuestionan las pretensiones de las partes en el juicio de amparo y tampoco se cuestiona la potestad que tiene los órganos jurisdiccionales que intervienen en la decisión del Juez de Distrito y/o del Tribunal Colegiado para resolver el amparo que se tramitó. En tal sentido, la controversia constitucional que se plantea no se trata de un recurso o ulterior medio de defensa para someter a una revisión la cuestión litigiosa en el juicio que se resolvió."

La cuestión que se plantea se circunscribe a la invasión de la esfera competencial del Titular del Ejecutivo Federal y de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, dada su intervención en el proceso de designación de los Magistrados de la Tercera Sección y las cinco salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa relacionada con la infracción al Régimen Federal, y al principio de división de poderes, que si bien dicha invasión se materializa a través de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional de la Federación, no puede estar exenta del control de ese Alto Tribunal, toda vez que atendiendo al sentido teleológico de la controversia constitucional, no existe otra vía, más que esta, para analizar cuestiones en las que un órgano derivado se arroge facultades que no le competen, pues de lo contrario, los órganos originarios del Estado

⁶ "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AÚN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO. El objeto principal de la controversia constitucional es tutelar el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado; de ahí que por regla general no es la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo; sin embargo, si dichas atribuciones llegasen a rebasar los principios rectores previstos en la Constitución, las posibles transgresiones estarán sujetas a dicho medio de control constitucional. En efecto, de manera excepcional procede la controversia constitucional intentada aun cuando el acto impugnado sea una resolución jurisdiccional en estricto sentido, si la cuestión a examinar atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, en aras de preservar su ámbito de facultades, pues de lo contrario se llegaría al extremo de que, por ser resoluciones jurisdiccionales, no podrían analizarse en esta vía cuestiones en las que algún tribunal se arroge facultades que no le competen, llegando al absurdo de que los poderes constituidos carecieran de medios de defensa para impugnar los actos que consideraran violatorios del ámbito competencial que les confiere la Norma Fundamental."

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 207/2019

carecerían de medios de defensa para impugnar actos que consideran violatorios del ámbito competencial que les confiere la Constitución Federal.

Sin embargo, el órgano jurisdiccional se extralimita en su determinación al establecer que es obligación del Presidente de la República **justificar la idoneidad de las personas designadas como magistrados, para lo cual debe señalar un apartado específico de manera pormenorizada e individualizada a través de una motivación reforzada porque las personas resultan idóneas para ocupar el cargo, detallando los méritos, la calidad ética y profesional que cada uno tenga en las materias específicas de fiscalización responsabilidades administrativas, hechos de corrupción y rendición de cuentas**, de donde se desprende que, en sustento de esa conclusión, el jugador será la autoridad que determinará la idoneidad de las personas seleccionadas por el Ejecutivo Federal, subordinado, así la toma de decisiones de esta última autoridad al Poder Judicial, pues será el Juzgado de Distrito o bien el Tribunal Colegiado quien determine si se ha cumplido a cabalidad con la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 311/2018, esto es, que se cumplan con los requisitos establecidos en la ejecutoria de mérito, dejando al margen la facultad otorgada a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para hacer tal determinación.

En el caso concreto, se estima actualizada la condición aludida pues, la conducta plasmada en el acto impugnado coloca al Poder Ejecutivo en un estado de subordinación respecto del Poder Judicial, como el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que al ordenar que el Presidente de la República deberá transparentar la designación de los magistrados, cuando dicha atribución es competencia del Senado de la República, provocando con ello no sólo que el Poder Ejecutivo sino también el Senado de la República no puedan tomar autónomamente sus decisiones, sino que además se deben someter a la voluntad del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito pues el fallo que en su momento se dictó los obligaría a acatarlo y, en consecuencia sería éste quien decidiría sobre la situación que deben guardar las designaciones de los Magistrados Anticorrupción ante el Poder Legislativo, sin que este último pueda optar por no acatar dicho fallo, es decir, no permitiría al Senado de la República ningún curso de acción distinto al que prescribiera.

Y en ese sentido, en el caso concreto, resulta aplicable en lo conducente la tesis del Tribunal Pleno P./J. 7/2012 (10a.), de rubro: **"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES DE FONDO DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR SU PROPIO CONTENIDO, EN RAZÓN DE SUS EFECTOS Y ALCANCES, CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE CONLLEVA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA."**⁷

⁷ De texto: "El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 16/2008, de rubro: 'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO'; en la inteligencia de que la excepción a que se refiere dicho criterio no se actualiza cuando de la demanda de controversia constitucional se advierte, sin duda alguna, que no se está ante un conflicto competencial entre órganos, poderes o entes, sino que lo efectivamente impugnado son las consideraciones de fondo de la resolución de un Tribunal de lo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 207/2019

Pero además, es criterio del Tribunal Pleno la improcedencia de la controversia constitucional en contra de un órgano depositario del Poder Judicial de la Federación, como lo es un Tribunal Colegiado de Circuito, dado que ejerce facultades extraordinarias de control constitucional, por lo que, poner nuevamente en tela de juicio su validez constitucional, en una vía regulada por normas de la misma jerarquía (artículos 103 y 107 de la Constitución) y que persiguen, por igual, la salvaguarda de la supremacía constitucional, trastornaría la solidez y eficacia no sólo del medio de control sometido, sino de todo el sistema de medios de control constitucional que prevé la Constitución Federal, haciendo nugatoria la autoridad que tienen, por disposición constitucional, los juzgadores unipersonales y colegiados de amparo.

Lo anterior, se desprende del contenido de las tesis P./J. 119/2004 y P. LXX/2004, de rubros: **"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE PROMUEVE EN CONTRA DE LOS ÓRGANOS DEPOSITARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN"**⁸ y **"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS ACTOS REALIZADOS EN SU EJECUCIÓN."**⁹

Contencioso Administrativo, toda vez que la controversia constitucional no es un recurso por medio del cual pueda someterse a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en un procedimiento natural; por ende, en este caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conlleva al desechamiento de plano de la demanda, en términos del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IX, junio de 2012, tomo I, página 18.

⁸ De texto: "Del artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las hipótesis de improcedencia de la controversia constitucional no comprenden al Poder Judicial de la Federación ni a los órganos que lo integran, toda vez que al resolver los asuntos sometidos a su competencia no ejercen facultades ordinarias de un nivel de gobierno, sino extraordinarias de control constitucional, de ahí que cuando aquella vía se entable contra los órganos depositarios de dicho Poder será notoriamente improcedente."

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Diciembre de 2004, Página 1117.

⁹ De texto: "El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 117/2000, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 1088, con el rubro: 'CONTROVERSIA CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES', estableció que la amplitud para ejercitar la acción de controversia constitucional no puede llegar al extremo de proceder para impugnar los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo, incluso cuando se aleguen cuestiones constitucionales. Lo anterior se robustece si se atiende a que las decisiones de los órganos de amparo son constitucionales por origen y definición, por lo que dicha improcedencia se funda en la circunstancia de que poner nuevamente en tela de juicio su validez constitucional en una vía regulada por normas de la misma jerarquía (artículos 103 y 107, y artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y que persiguen por igual la salvaguarda de la supremacía constitucional, trastornaría la solidez y eficacia no sólo del medio de control sometido, sino de todo el sistema de medios de control constitucional que prevé la Constitución Federal, haciendo nugatoria la autoridad que tienen, por disposición constitucional, los juzgadores unipersonales y colegiados de amparo, cuestionándose la validez de las sentencias que conceden la protección federal al quedar sujetas a un nuevo análisis constitucional. En este orden de ideas, este

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 207/2019

En consecuencia, procede desechar la controversia constitucional promovida, en términos de lo establecido en el artículo 25¹⁰ de la Ley Reglamentaria de la Materia, ya que la Ministra instructora en una controversia constitucional puede válidamente desecharla de plano si advierte la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia y, en el caso, se actualiza la causal prevista en el artículo 19, fracción VIII¹¹, de la citada normativa reglamentaria, con relación a los artículos 94, párrafo primero¹², y 105, fracción I¹³ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

tratamiento debe hacerse extensivo a los actos de ejecución de la propia sentencia de amparo, pues su realización encuentra su razón de ser en la resolución constitucional que encontró un vicio que habría de ser superado con la ulterior actuación de las autoridades, y en la que se pretende materializar la protección constitucional otorgada por el Juez de amparo."

Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XX, diciembre de 2004, página 1119.

¹⁰ **Artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.** El ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.

¹¹ **Artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.** Las controversias constitucionales son improcedentes: [...]

VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley.

En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio.

¹² **Artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.** Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. [...]

¹³ **Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.** La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a).- La Federación y una entidad federativa;

b).- La Federación y un municipio;

(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)

c).- El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente;

(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)

d).- Una entidad federativa y otra;

e).- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)

f).- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)

g).- Dos municipios de diversos Estados;

(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)

h).- Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

i).- Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; (REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)

j).- Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y

k).- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)

(REFORMADO, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014)

l).- Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución.

k).- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)

(REFORMADO, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014)

l).- Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución.

(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)-

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c) y h) anteriores, y la resolución de la Suprema



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 207/2019

Del primero de los preceptos que anteceden, se advierte que la improcedencia de la controversia constitucional puede resultar de alguna disposición de la Ley Reglamentaria de la Materia, lo cual implica considerar no sólo las que específicamente prevé tal ordenamiento, sino, incluso, las que puedan derivar del conjunto de normas que rigen el sistema de control constitucional del que forman parte, toda vez que, en términos del artículo 1 de la propia Ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá las controversias constitucionales a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece las bases de procedencia de este medio de control constitucional, siendo aplicable, a este respecto, la tesis aislada **P. LXIX/2004**, cuyo rubro es el siguiente:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, NO ES INDISPENSABLE QUE EXISTA Y SE VINCULE CON UNA DISPOSICIÓN EXPRESA Y ESPECÍFICA AL RESPECTO EN ESE ORDENAMIENTO JURÍDICO."¹⁴

Sin que pase inadvertido que la parte actora invoque para sustentar su postura, el criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los recursos de reclamación 81/2017 CA Y 82/2017 CA, en los que resolvió que ante la impugnación de una resolución definitiva proveniente de un órgano terminal y por ende, inatacable, no se actualizaba de forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al margen de que la excepción establecida por el Tribunal Pleno debe examinarse

Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia. [...].

¹⁴ De texto: "Conforme a la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia del juicio debe resultar de alguna disposición de esa ley, esto es, que sea consecuencia de la misma, sin que sea necesario que expresa y específicamente esté consignada como tal en alguna parte del ordenamiento, pues siendo la condición para que dicha causa de improcedencia se actualice, que resulte del propio ordenamiento, ésta válidamente puede surtirse cuando del conjunto de disposiciones que integran a la citada ley reglamentaria y de su interpretación, en lo que se refiere a la controversia constitucional, en tanto delínean el objeto y fines de la propia figura procesal constitucional, se revelen casos en que su procedencia sería contraria al sistema de control constitucional del que forman parte o de la integridad y naturaleza del juicio mismo."

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, página 1121.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 207/2019

en cada caso en concreto, lo cierto es que en la especie según se advierte de la demanda inicial los argumentos expresados por la parte actora van dirigidos precisamente a controvertir la decisión del tribunal colegiado en cuanto a las propias consideraciones de la sentencia en razón de sus motivos, fundamentos, alcances y efectos.

Y en ese sentido, la notoria y manifiesta improcedencia se actualiza en función de las normas que rigen el sistema constitucional de mérito y de los criterios jurisprudenciales sustentados por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente invocados.

Por tanto, en el presente caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la Materia, en relación con los diversos 94, párrafo primero, y 105, fracción I, de la Constitución Federal, por lo que procede desechar la demanda que nos ocupa.

Con apoyo en las disposiciones legales y las tesis de jurisprudencia citadas, se

ACUERDA

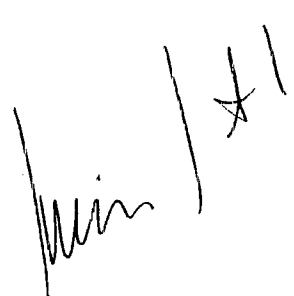
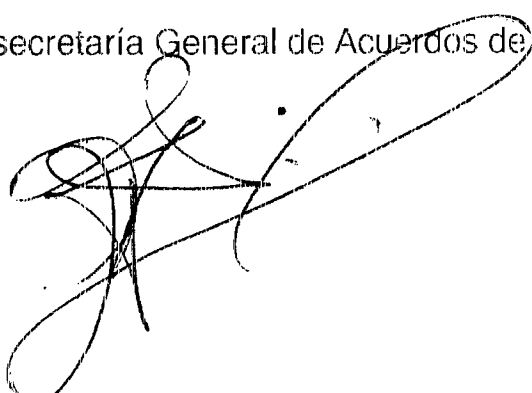
PRIMERO. Se desecha de plano la controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo Federal.

SEGUNDO. Sin perjuicio de lo anterior, se tiene al promovente designando **delegados y domicilio** para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

Notifíquese. Por lista y por oficio.

Una vez que cause estado este proveído, archívese el expediente como asunto concluido.

Lo proveyó y firma la **Ministra instructora Norma Lucía Piña Hernández**, quien actúa con Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-53

Esta hoja corresponde a la notificación por lista del proveído de cuatro de junio de dos mil diecinueve, dictado por la **Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Instructora** en la **controversia constitucional 207/2019**, publicado el siete de junio de dos mil diecinueve. Conste.

EL **07 JUN 2019** SE NOTIFICÓ POR LISTA A LOS
INTERESADOS LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
SIENDO LAS CAUSAS INDICADAS EN EL LISTADO INDICADAS
VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS
POR HECHA LA NOTIFICACIÓN, POR MEDIO DE LISTA, DUY FE